



EDITORIAL: UN DEBATE ABIERTO

El alza constante en el precio de los combustibles en Chile se ha transformado, una vez más, en un tema central de la agenda económica y un golpe directo al bolsillo de la ciudadanía. La reciente preocupación se enmarca en un escenario internacional complejo, con el petróleo Brent superando los US\$100 por barril y un gasto fiscal asociado al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) que amenaza con alcanzar cifras históricas, tensionando las cuentas públicas.

Las proyecciones de distintas entidades han anticipado sucesivos aumentos en los precios mayoristas de las gasolinas y el dié-

sel, impulsados principalmente por la depreciación del peso chileno frente al dólar y las alzas en el precio internacional del petróleo, a menudo exacerbadas por la tensión geopolítica, como los conflictos en Medio Oriente. En este contexto, el rol del MEPCO, el mecanismo diseñado para suavizar estas fluctuaciones, ha vuelto a estar bajo la lupa.

Tal como han señalado algunos economistas, el MEPCO actúa como un amortiguador perceptivo, más que estructural. Su función es distribuir la magnitud de las alzas en el tiempo, evitando un impacto de golpe al consumidor, pero no elimina la inevitabilidad de que el aumento

termine traspasándose por completo. Es un mecanismo que suaviza el alza, ya sea "en menos 'gotas', es decir, en menos ajustes, pero más intensos", o distribuyendo el impacto en varias etapas pequeñas. En episodios de alta volatilidad global, como la registrada en marzo de 2026, el mecanismo opera como un subsidio al reducir parte del impuesto específico. Sin embargo, la acumulación de estos costos presiona el gasto público.

La preocupación más profunda radica en el efecto cascada que el encarecimiento de los combustibles tiene sobre la economía real. El alza impacta de inmediato al transporte, no solo el particular y público, sino sobre todo al transporte de carga. Dado que el transporte de carga moviliza tanto bienes de consumo como insumos para las empresas, esta presión se traduce

directamente en un aumento en los precios de una amplia gama de productos y servicios, impactando directamente en el costo de la vida de todos los chilenos.

El debate no es solo técnico, sino social y político. Mientras el Gobierno evalúa ajustes para flexibilizar la aplicación de las alzas, es fundamental que la discusión se centre en soluciones más allá del paliativo. La dependencia del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio son realidades económicas que se deben abordar con medidas de mediano y largo plazo que fortalezcan la economía y busquen alternativas energéticas, mitigando así el constante peso que el combustible impone al desarrollo y al bienestar de las familias chilenas.